

por ochenta y nueve cascos petróleo y dos aguaras, procedentes de Campeche.

Segundo; sáquese testimonio de este fallo para su publicacion, y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia nacional para su revision, conforme á los artículos 13 y 27 de la citada ley de 20 de Enero. Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril tres de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Mérida por los señores Ibarra Dondé y C^{ta}, contra los procedimientos del tesorero general del Estado quien les cobra el derecho municipal impuesto por decreto local del 12 de Enero de 1870 por el consumo de 89 frascos de petróleo y dos de aguaras, efectos extranjeros nacionalizados y recibidos en 16 y 27 de Julio del año de 1871 en las canoas "Lola y Gloria" procedentes de Campeche, alegando que con este hecho se invaden las atribuciones federales, contraviniendo á lo expresamente dispuesto en la ley de 19 de Mayo de 1868.

Vistas las constancias de autos y

Considerando: que aun cuando los Estados de la federacion en uso de su soberanía, pueden dictar leyes para su régimen interior, tienen que sujetarse á las prevenciones de la Constitucion; que segun aparece del informe de la autoridad contra quien se solicita el amparo, la contribucion impuesta por el decreto de 12 de Enero de 1870, no se aplica á los efectos propios de los Estados ni á los que se importan en el puerto del Progreso: esta excepcion en los efectos nacionalizados en los puertos de otros Estados, trae un recargo á la importacion extraneja; que no puede decretarse

por el gobierno de los Estados sin consentimiento del Congreso general, segun las prevenciones de la fraccion 1^a del art. 112 de la carta federal de la República. Con tales fundamentos se decreta que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Mérida, que negó el amparo á los peticionarios y se declara: que "la justicia de la Union ampara y protege á los señores Ibarra, Dondé y C^{ta}, contra los actos del tesorero general del Estado que les cobra el impuesto establecido por decreto local de 12 de Enero de 1870, causado por 89 frascos de petróleo y dos de aguaras procedentes de Campeche.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así lo mandaron por mayoría de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Abril cuatro de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Sonora por D. Walterio W. Symon, en representacion de su hermano D. Roberto, socio director de la casa de moneda de Hermosillo, contra el despojo que dice, le han hecho, de una parte de dicha casa de quien se titulan propietarios.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR

FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal que suscribe, como el

timo alegato en el juicio de amparo promovido por D. Walterio Simon en representacion de los antiguos empresarios de la casa de moneda de Hermosillo sobre el despojo, que dice se les ha hecho, de una parte de ella que les pertenece en propiedad, esponer: Que en su concepto no se ha verificado, tal despojo ó expropiacion, porque lo único que se ha hecho es, que el supremo gobierno al dar la Orden de tomar posesion de ese edificio, lo ha hecho con objeto de asegurar los intereses del erario, no habiendo nunca reconocido como legal tal enagenacion, y cuando mas quizá podrá reconocer los cinco mil pesos que han entregado por esa parte al gobierno del Estado, constando como consta que esa suma aparece en los inventarios que los mismos empresarios han presentado al supremo gobierno; y estando como estan en liquidacion, debe esperarse el resultado de esta, quedando entretanto como en depósito la expresada finca hasta no saberse si la antigua empresa debe á la hacienda pública ó esta á ellas alguna cantidad. Por lo mismo, no creo este ministerio que haya lugar al amparo que se solicita, supuesto que el empleado que ha ejecutado la Orden del supremo gobierno no ha hecho mas que cumplir con su deber, asegurando los intereses del fisco, teniendo este el privilegio de no pelear despojado, cuyo principio se encuentra consignado en todas las leyes fiscales.

Guaymas de Zaragoza, Diciembre trece de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. José Monteverde.*

Sentencia del O. juez de Distrito.

Guaymas de Zaragoza, Diciembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio promovido por D. Walterio W. Symon en representacion de su hermano D. Roberto, socio director de la casa de moneda de Hermosillo, con-

tra la ocupacion de la parte de dicha casa que se titula "propia" de los empresarios, por considerar violada en su persona la garantia individual que asegura el art. 27 de la Constitucion federal; el informe documentado emitido por la gefatura de hacienda del Estado, como autoridad ejecutora del acto reclamado; el pedimento fiscal relativo, pidiendo que se abriera el negocio á prueba, como se verificó; los últimos alegatos de las partes, con la escritura original de venta, que la actora acompañó al suyo para su confrontacion con la copia presentada al entablar el juicio (la cual doy fé hallarse conforme con dicha original); el acta de posesion y cuanto mas consta de autos; y

Considerando: que para que procediese en el caso el amparo solicitado, sería necesario que apareciese por una parte la justificacion indudable de la propiedad alegada, y por otra que la ocupacion de esta por el gobierno general ó sus agentes se hiciera sin el consentimiento de los empresarios, que de lo primero no es prueba bastante la escritura de venta otorgada en favor de ellos por disposicion del gobierno del Estado en 1865, puesto que no constan de la misma, ni la entrega de los títulos originarios de la finca vendida, de los cuales ni siquiera se hizo mencion, ni el dominio del Estado ó de la federacion en esta; ni finalmente, la facultad del vendedor para enagenarla en uno ú otro supuesto; que aun concedida la legalidad de la venta y la propiedad consiguiente de los empresarios, y á pesar de lo diminuto del informe de la gefatura de hacienda y de haber descuidado el ministerio público promover las pruebas conducentes en el término abierto al efecto á su solicitud, aparece del inventario adjunto á dicho informe (fojas 11 á 13) que los empresarios han hecho cargo al gobierno supremo del valor de la repetida parte de la casa de moneda comprada al del Estado en cinco mil pesos, lo que demuestra su consentimiento en el tras-

paso de ella: que las explicaciones de este hecho dadas por el actor en sus escritos (fojas 7 vuelta y 16 vuelta), diciendo que fué la intencion de los empresarios traspasar su propiedad al gobierno si á este le convenia tomarla, previa la indemnizacion correspondiente, por lo que la incluyeron bajo el rubro especial de "*parte propia*" no satisfacen, porque sobre estar sumado su importe sin distincion con las demas partidas que forman el inventario remitido al gobierno como base ó principio de la liquidacion que les exigió, desaprobado el contrato de amonediacion celebrado con el Estado, figura la suma total de \$51,544.58 que aquel arroja, como primera partida del *Debe* de dicha liquidacion ó cuenta con la casa de moneda (como costo de establecimiento) y como última el interes sobre la expresada suma al 1½ p^o por nueve años, segun consta á fojas 26 frente del juicio principal promovido por el quejoso y al cual se refiere en este (de lo que doy fé:) que en consecuencia no importando el acto reclamado la ocupacion de la propiedad particular de los antiguos empresarios sin su consentimiento, no existe la violacion de la garantía individual que invocan; con tales fundamentos, de acuerdo con la voz fiscal y en cumplimiento de los artículos 13 y 27 de la ley general de 20 de Enero de 1869, este juzgado falla:

Primero; la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Walterio W. Symon representante de los antiguos empresarios de la hacienda de Hermosillo, contra la ocupacion de la parte de dicha casa que bajo el rubro de *parte propia*, figura en los inventarios presentados al gobierno, y de la cual ha tomado posesion el nuevo director nombrado por este C. Florencio Monteverde.

Segundo; notifiquese, publíquese en el periódico oficial del Estado y remítanse los autos originales á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmándolo con los testigos de su asis-

tencia ordinaria.—D. Elias G.—A.—P. del Rincon.—A.—Pastor Rodriguez.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril dos de mil ochocientos setenta y dos.

Visto el juicio de amparo que en trece de Noviembre del año próximo anterior, promovió en Guaymas ante el juez de Distrito de Sonora, D. Walterio W. Simon en representacion de su hermano D. Roberto, socio director de la casa de moneda de Hermosillo, contra la ocupacion de la parte de esa casa que llaman propia de los empresarios, alegando: que á solicitud del C. Florencio Monteverde, director nombrado por el gobierno general de la casa de moneda referida, le habian dado posesion de ella los ciudadanos jefe de hacienda del Estado y prefecto político del Distrito de Hermosillo, con violacion de la garantía que otorga el artículo 27 de la constitucion federal, porque la finca de que se le ha despojado, es independiente de la casa de moneda, nada tiene que ver con el gobierno y la han tenido los empresarios á título de compra. Visto el informe del jefe de hacienda, autoridad que se dice, ejecutora del acto reclamado; la copia del inventario que acompaña; la constancia de haberse mandado recibir este juicio á prueba, sin resultado, por no haberse rendido ninguna; los documentos que exhibió el promovente al establecer su demanda; el alegato que presentó y los pedimentos del promotor fiscal, con todo lo demas que ver convino.

Considerando:

Primero; que segun las constancias de autos, la parte de la casa á que se contrae el quejoso, está comprendida en la casa de moneda de Hermosillo y es una de las oficinas de ésta, pues aparece que los empresarios la listaron y avaluaron haciendo

cargo de su precio al gobierno general en el inventario que de la misma casa de moneda le presentaron, y aparece tambien, que en esa parte de la casa se halla el departamento de blanqueamiento y otras oficinas anexas á la amonedacion.

Segundo; que habiendo estado la casa de moneda dicha, á disposicion del gobierno, ha podido un empleado suyo á virtud de sus instrucciones, ocupar la parte del edificio de que se trata, sin que importe esa ocupacion hecha con derecho, violencia alguna al de propiedad que ha pretendido deducir el quejoso, cuyo derecho en caso de disputa, seria objeto de los tribunales comunes, y

Tercero; que en consecuencia, no existe la violacion de garantias que ha reclamado D. Walterio W. Simon. Por las consideraciones espuestas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Es de confirmarse y se confirma, la sentencia que en 20 de Diciembre del año próximo pasado pronunció en Guaymas el juez de Distrito de Sonora, declarando: que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Walterio W. Simon, representante de los antiguos empresarios de la casa de moneda de Hermosillo, contra la ocupacion de la parte de dicha casa que bajo el rubro de «parte propia» figura en los inventarios presentados al gobierno, y de la cual ha tomado posesion el nuevo director nombrado por éste, ciudadano Florencio Monteverde.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el toca.

Asi por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Anza.*—*S. Guz-*

man.—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M^o Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Abril ocho de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustin Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México, por Agapito Polo, por creer que hay violacion de garantias en su persona, con el hecho de haber sido destinado al servicio de las armas contra su voluntad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez.

El promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el joven Agapito Polo, contra el hecho de haber sido tomado de leva por los soldados del cuerpo de caballería número 11, en el estado de esos autos que es el de alegar haciéndolo en la forma que prescribe el art. 13 de la ley de 20 de Enero de 1869, dice: que la justificacion de vd. se ha de servir otorgar el amparo que solicita el quejoso, en razon de haberse violado en su persona, con el hecho material de habérselo tomado de leva y el alistamiento en el cuerpo núm. 11 de caballería con las formalidades que expresa el certificado de filiacion que obra en autos, las garantias otorgadas por el art. 5º de la Constitucion en vista de las razones que someramente pasa á exponer, porque el presente caso es de tal naturaleza, que á juicio del que suscribe, con las consideraciones que tiene expresadas en su pedimento anterior, cree suficiente para que se le conceda el amparo.

No hay necesidad de reproducir en este alegato de una manera minuciosa todas las circunstancias especiales del caso, porque en varios documentos que obran en autos se desprenden y aparecen como en relieve